Los archivos
municipales
en la España
democrática

En la puerta del Auditorio de Zaragoza una joven archivera hizo este comentario: «me parece mentira estar rodeada de tanta gente que le interesen las mismas cosas que a mí y poder hablarlas». Lo dijo mientras disfrutaba un cigarrillo —que ya no se podía, por ley, fumar en el interior—, y parecía feliz. La reunión de archiveros municipales depararía para el periodista dos sorpresas, la primera de ellas constatar la preparación teórica de los ponentes y participantes en general, sobre su disciplina; la segunda, el entusiasmo que en los mismos despertaba la conciencia de su función social. Las cuestiones legales y profesionales fueron tratadas con todo detalle.

Los archivos municipales en la España democrática

Para el que hasta hace poco era llamado un hombre de la calle es inimaginable la tensión teórica, laboral y emocional en la que se desenvuelve el mundo de los archiveros. El congreso celebrado en Zaragoza el 20, 21 y 22 de octubre de 2005, *Los archivos municipales en la España democrática*, era para el periodista un «espectáculo» que al principio se le antojaba «difícil», incluso áspero, pero a medida que prestaba atención a las ponencias y, sobre todo, observaba la intensidad con la que archiveros de toda España participaban en las discusiones y talleres y percibía el entusiasmo que el mero hecho de estar reunidos suscitaba en ellos, la dificultad y la aspereza se transformaban en curiosidad y en esa forma de admiración no reconocida que solemos llamar perplejidad. Algunos de ellos, aunque la ley antitabaco aún no estaba en vigor, salían disciplinadamente a fumar su cigarrillo a las puertas del Auditorio Palacio de Congresos, y allí fue donde de labios de una joven archivera sorprendí esta frase: «acostumbrada a estar todo el día entre papeles hablar con la gente me parece increíble». Aunque pronunciada con alegría, la afirmación venía a resumir uno de los principales problemas que a lo largo del Congreso se pondría de manifiesto: la invisibilidad de su trabajo. Esta opacidad laboral, unida a los problemas de la formación (que a su vez inciden en la disparidad de las categorías laborales), la legislación estatal y autonómica, y las nuevas tecnologías, darían contenido a tres jornadas en las que faltaron minutos a las horas para que todos se expresaran.

A la crónica se le plantea un primer problema: exceso de contenido. Y un segundo: el grado de especialización de algunas ponencias, sobre todo aquellas centradas en la normativa archivística que tienen difícil traslación a un lenguaje no técnico. En auxilio de estas dificultades han venido, precisamente, las nuevas tecnologías. En la página www.congresoarchivosmunicipales.com podrán encontrar los interesados las ponencias y comunicaciones, con la ventaja añadida de poder acceder no sólo a su redacción original (notas incluidas), sino a toda su extensión que en muchos casos no pudo, por problemas de tiempo, ser reflejada oralmente en el Congreso.

Políticas y normativas archivísticas

Severiano Fernández Ramos, Universidad de Cadiz.

Una Ley de Archivos de ámbito estatal es imprescindible

La Ley de Bases de Régimen Local que ha cumplido el 2 de abril de 2005 veinte años de vigencia es, para el profesor Fernández Ramos, la primera disposición que recogía el mandato constitucional sobre el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros de la Administración. A pesar de las distintas opiniones sobre el alcance del artículo 105 B de la Constitución, «en la transición democrática parecía flotar la interpretación de que la Constitución había consagrado el libre acceso a los archivos y registros administrativos». Interpretación que le parece optimista, por cuanto, en su opinión, sólo anuncia «la regulación del uso de los documentos públicos por los ciudadanos, entendiendo éste, eso sí, a partir de pautas democráticas». Tendrían que pasar catorce años para que aquel mandato tuviera su reflejo en una ley. Sería la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, del año 1992, aunque en el ámbito de la profesión se ha considerado que la Ley del Patrimonio Histórico del año 1985 ya lo había hecho. Sin embargo, para Fernández Ramos «al hacer parte del patrimonio histórico a todos los documentos públicos se estaba forzando la situación, tanto que la mencionada Ley de Régimen Jurídico obviaría sus prescripciones entendiéndolas como aplicables sólo a los archivos históricos y fijaría criterios distintos y, en algún caso, dispares».

El cambio más significativo de la Ley de Régimen Jurídico no recae sólo en el desarrollo del mandato constitucional sino en la introducción

de un cambio significativo en la motivación de los derechos; el libre acceso se regula no en relación con el derecho al acceso a la Cultura, sino «a una relación democrática entre administración y ciudadanos».

La Administración local, y en concreto los archivos municipales han sido pioneros en la aplicación del derecho de acceso a los documentos, mediante la creación de las infraestructuras necesarias y la creación de una tipología documental. «Han sido y siguen siendo un ejemplo de buen hacer, mostrando un trabajo de cooperación entre profesionales que no se ha dado, lamentablemente, entre otras administraciones». Palabras que Fernández Ramos apoyó en distintos hitos históricos del desarrollo de los archivos incluyendo la generación textos profesionales, entre los que citó (y lo harían en otras intervenciones) el *Manual de Archivos Municipales* de Vicenta Cortés Alonso.

La proximidad entre la Administración municipal y el ciudadano ha marcado el perfil profesional de los archiveros municipales, convirtiéndole en garante de derechos. Por otra parte el control integral del ciclo de vida de los documentos ha «fortalecido el valor de uso» de los mismos, tanto desde el punto de vista de la Administración como de los ciudadanos. «A partir de esta reflexión sobre la experiencia de los archivos municipales en la joven democracia española, cabe preguntarnos si en todos los ámbitos de nuestro sector público el diagnóstico sería igualmente positivo y, sobre todo, si hay lagunas importantes en cuanto a la gestión de documentos públicos y a la administración de archivos que deban ser cubiertas con urgencia».

Al convertirse los archivos en garantes de derechos es imprescindible un «compromiso, por parte de los poderes públicos, de garantizar la preservación, disponibilidad y accesibilidad de los documentos». Compromiso que debe reflejarse en las leyes, «construyendo el entramado legal adecuado para asentarlos en el derecho positivo». Y dinero, claro. Para Fernández Ramos, independientemente del buen funcionamiento de algunos ámbitos de la profesión funcionen bien, «nuestro país está en la primera etapa» de este proceso.

El derecho de acceso a los documentos públicos debería tener un carácter primordial en un Estado de derecho y, «lamentablemente esto no ha ocurrido hasta ahora» en España, aunque tampoco «en numerosos países de larga tradición democrática». Pionera en esto como en tantas otras cosas relacionadas con los derechos ciudadanos, Suecia promulgó la primera ley que garantizaba el derecho de acceso. En cualquier caso, esta conquista legal, que la OCDE considera una fuerza impulsora de la participación democrática y de lucha contra la corrupción, está movilizando los procesos de transición democrática de países de Europa del Este o de Brasil, entre otros.

El compromiso ético

El descenso vertiginoso en la consideración del ciudadano de la clase política junto a la asunción de compromisos internacionales promulgados entre otras instituciones por la OCDE ha hecho que varios países del primer mundo adopten Códigos de Buen Gobierno relativos al funcionamiento de distintas administraciones. «Implicado en esta corriente ética, el gobierno español aprobaba en la reunión de su Consejo de Ministros de 18 de febrero de 2005, el Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado. En su preámbulo, el «código» señala que en el momento actual se hace necesario que los poderes públicos ofrezcan a los ciudadanos el compromiso de que todos los altos cargos en el ejercicio de sus funciones han de cumplir no sólo las obligaciones previstas en las leyes, sino que, además, su actuación ha de inspirarse y guiarse por principios éticos y de conducta que hasta ahora no han sido plasmados expresamente en las normas, aunque sí se inducían de ellas y que conforman un código de buen gobierno». Conceptos como objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, credibilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, accesibilidad, o eficacia son, entre otros, los defendidos o proclamados. Dos de ellos, transparencia y accesibilidad», son los que interesan a Fernández Ramos en relación con los archivos y, particularmente, su desarrollo en los apartados de «principios éticos» y «principios de conducta», que transcribió literalmente:

Principios éticos:

Sus actividades públicas relevantes serán transparentes y accesibles para los ciudadanos con las únicas excepciones previstas en las leyes.

Principios de conducta:

Garantizarán el ejercicio del derecho de los ciudadanos a la información sobre el funcionamiento de los servicios públicos que tengan encomendados, con las limitaciones que establezcan normas específicas.

Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y entrega a sus posteriores responsables.

El entramado legal

Los códigos éticos están muy bien pero es necesario que tengan un reflejo en el marco legal. El impulsado por el gobierno español afirma ser un reflejo de las normas jurídicas vigentes en el ordena-

miento jurídico español. También está bien, pero no es suficiente. Para Fernández Ramos, el PSOE debe cumplir el compromiso adquirido en su programa electoral de: «impulsar una ley sobre el derecho al libre acceso a la información que garantice que todos los poderes, autoridades públicas y entidades sostenidas con fondos públicos, faciliten, en tiempo útil, el libre acceso a toda información o documento oficial, con la única excepción de lo que atente a la legislación de protección de datos o de secretos oficiales y que, asimismo, cree una autoridad independiente, elegida por el Congreso de los Diputados por mayoría cualificada, con facultades para obligar a las Administraciones Públicas a la entrega inmediata de la información o el dato solicitado». Esta Ley de Libertad de Información deberá «armonizar el desbarajuste introducido en estos veinticinco años de democracia por una legislación dispersa, surgida en ámbitos sectoriales y territoriales dispares», llegando a ser contradictoria y «siempre de muy compleja interpretación y difícil aplicación».

Si la Ley de Libertad de Información es necesaria una Ley de Archivos de ámbito estatal es imprescindible. Las carencias que ya había señalado respecto a la Ley del Patrimonio Histórico o la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, vuelve a ponerlas de manifiesto. La superación del marco cultural para la regulación de los archivos le parece una obviedad que convive junto al disparate de que continúe en vigor el Reglamento de Archivos de 1901. La nueva ley debe jugar «un papel regulador de los cauces de cooperación» con las leyes autonómicas ya promulgadas.

La logística archivística

Paralelamente a la creación de una legislación que sustente las actuaciones de los organismos públicos con relación a sus documentos, deben de ser acometidas otras actuaciones que garanticen la vida de los mismos. Después de citar la obra, *Archivos vs. Corrupción*, de la peruana Aida Luz Mendoza, señaló los tres puntos esenciales que tales actuaciones deben abordar:

1. Configuración de Sistemas de Gestión Documental obligatorios en todos los organismos y entes públicos, así como el establecimiento de sistemas archivísticos en las administraciones complejas.
2. Creación y coordinación de Redes de infraestructuras archivísticas.
3. Dotación de medios económicos y humanos.

La toma de decisiones sobre la eliminación de documentos, «entre otras razones por la falta de archiveros que hagan el trabajo», es otra

asignatura pendiente en España. La carencia de infraestructuras impide que el Estado asuma su responsabilidad en esta materia. La creación, durante el gobierno Aznar, de CADA (Centro de Almacenamiento de Documentación Administrativa), «no puede sino ser vista como un torpedo con cabeza nuclear lanzado contra los archivos nacionales». Pues, en su opinión, sitúa en la «cúspide de nuestra administración una gestión privada de documentos públicos». Frente a esto el modelo francés, un proyecto de ciudad de los archivos, en Saint Denis, le produce envidia. Un proyecto «apoyado por todos los partidos y todas las administraciones».

Finalizando su intervención, Fernández Ramos lamentó que el presupuesto destinado para archivos en 2006, no invite al optimismo. «Un incremento del 3,47%, muy por debajo de la media del aumento del presupuesto del Ministerio de Cultura, nos sitúa muy lejos de poder afrontar las enormes lagunas existentes». Este bajo presupuesto lo vincula a la consideración de los archivos dentro del ámbito de este Ministerio, porque «culturalmente son mucho más importantes los museos, la música o el cine». La salida del Ministerio de Cultura y la inclusión de los archivos en el Ministerio de Administraciones Públicas, favorecería, en su opinión, tanto al presupuesto como a los profesionales. «Si la Administración General del Estado quiere homogeneizar sus sistemas de gestión documental y recomponer su sistema archivístico es necesario que cuente con un plantel de funcionarios profesionalmente capaces, de ámbito interministerial, lo que implicaría su adscripción, como en el resto de cuerpos generales, al Ministerio de Administraciones Públicas».

Recursos humanos: nuevos perfiles profesionales

Paloma Fernández Gil: «Es imprescindible la creación de una licenciatura en Archivística y Gestión de Documentos».

De los sótanos al Grupo de Madrid

La que habría de ser una de las intervenciones más extensas y más interesantes del Congreso comenzó con una cita de Lobo Antunes: «*Nunca he coleccionado nada, nunca he juntado papeles, nunca he guardado manuscritos. Vivo del viento*».

Paloma Fernández Gil, archivera del Ayuntamiento de Alcorcón, es posible que cumpla las premisas del retrato escrito por Lobo Antunes, pero no cabe la menor duda de que guarda conocimientos y pasión por su profesión en cantidades muy importantes. Comenzó preguntándose por la existencia de los archiveros y particularmente por los archiveros municipales. Concluyó que es posible su existencia pues logran que «cierta esfera de lo que ocurre en los municipios no se vuele y que los documentos tengan un sentido». No siempre fue así, «hubo un tiempo en el que el archivero municipal era un erudito, incluso un cronista que, ignorando el origen de su profesión, despreciaba los documentos que él consideraba administrativos».

Para comprender dónde se encuentra, qué es realmente y qué puede llegar a ser un archivero municipal, así como su perfil profesional, nos trasladó a los años sesenta. Al Instituto de Administración Local, en Madrid, para ser más exactos. Allí un grupo de secretarios de Ayuntamiento se esfuerza por aprender Organización y Métodos a través del manual Garamond y el cuadro de clasificación por materias recomendado por el Primer Seminario de Estudios de Administración Local. Un aprendizaje para uso inmediato en el que los documentos históricos ni se abordan. A continuación nos traslada al sótano del Ayuntamiento de una gran ciudad donde trabajan un grupo de investigadores y el archivero que se ocupa en la transcripción de un documento del siglo xvii, rodeados de libros y legajos cubiertos de polvo. Por las dependencias del Ayuntamiento se acumulan miles de documentos que el archivero considera ajenos hasta que alguien los acerque a su cubículo. Seguimos hasta una ciudad de menos de 100.000 habitantes. En un almacén del Ayuntamiento se encuentran «un montón de documentos de todos los siglos», de los que nadie es responsable, no cuentan con uno de los 33 archiveros que entonces atendían a este tipo de municipios en toda España.

En 1966 existían 97 archiveros municipales en España y «la mayoría respondía a la figura del erudito local». Entre 1941 y 1966 su número había descendido un 20% afectando, sobre todo, a municipios menores de 100.000 habitantes.

El cambio en esta situación se produce en 1981. Una convocatoria lanzada por el entonces alcalde de Alcobendas, Carlos Muñoz, y la archivera Julia María Rodríguez, actual presidenta de ANABAD [Confederación de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas], Archiveros de la provincia de Madrid, del Ministerio de Cultura y de la Diputación formaron un grupo de trabajo y acometieron la tarea de crear «un cuadro de organización de fondos de archivos municipales como base en la que sustentar la unificación del sistema». En noviembre de 1982 los resultados fueron presentados en el primer Congreso de Archiveros y Bibliotecarios de Administración Local. Aquel grupo de trabajo estaba formado mayoritariamente por li-

cenciados en Historia que se habían especializado en la Escuela de Documentalistas o «en su heredero» el Centro de Estudios Bibliográficos y Documentales de Madrid. También había auxiliares administrativos y secretarios, «pero pocos archiveros del grupo A».

Constitución, democracia y crecimiento demográfico

Entre los elementos políticos y sociológicos que propiciaron el resurgir del gremio de archiveros, Paloma Fernández Gil señaló el crecimiento en habitantes de municipios como Madrid capital que entre 1970 y 1971 alcanzó el 23,57% o de las llamadas ciudades satélites, Alcorcón o Móstoles, que alcanzaron tasas del 100%, pues en la misma proporción crecía el número de documentos. Junto a esto la proclamación de la Constitución y, con ella, la configuración del Estado de las Autonomías abrió nuevas expectativas. De pronto la recuperación de la historia local se hizo muy importante y «la cara de muchos políticos municipales cambió al mirar a los archivos». Este cambio «captado y bien utilizado por los archiveros», dinamizó la situación.

Cataluña promulgó la primera ley de archivos. En ella se dice que «los poderes públicos deberán garantizar la conservación de la documentación porque constituye la base documental de su historia y uno de los fundamentos de su identidad nacional». Los archiveros catalanes supieron aprovechar la coyuntura y «colaboraron en esta actividad cultural, pero lo más importante fue que no se quedaron ahí y aprovecharon para avanzar en la creación y organización de los archivos administrativos y adentrarse en la gestión documental». Los trabajos realizados en el Ayuntamiento de Barcelona y en la Generalitat fueron «fundamentales para la aparición de la Ley 10/2001 de Archivos y Documentos de Catalunya que, entre otras cosas, dice: «los archivos municipales definen, implantan y mantienen el sistema de gestión de la documentación administrativa, en fase activa y semiactiva. Y gestionan y conservan la documentación en fase semiactiva y la documentación histórica».

El libre acceso a los documentos garantizado por la Constitución, y la consiguiente necesidad de archivos y archiveros, «nos permitió demostrar que existíamos y éramos muy útiles a aquellos que más nos podían ayudar: secretarios de ayuntamiento y políticos». Las conclusiones de una mesa redonda celebrada en el Instituto de Estudios de Administración Local, en 1986, ya establecían algunos rasgos de la profesión: «los municipios de más de 20.000 habitantes deberían contar con un puesto de archivero adscrito al grupo A; entre 10.000 y 20.000 con un archivero del grupo B, y en los de menos de 10.000 estas funciones pasaban al secretario que habría de hacer un curso espe-

cífico». También se sugería la creación de mancomunidades de municipios, se solicitaba la celebración de unas jornadas nacionales sobre archivos y se decía que el archivero disponía las normas de clasificación y ordenación de los archivos de gestión. «No hay que desmoralizarse porque hayamos tardado 19 años en tener estas jornadas».

En Madrid, Ana Duplá diseña el Plan de Recuperación de Archivos Municipales en 1985. En él se contemplaba la ayuda a los pequeños municipios, bien económica o recogiendo y gestionando sus documentos. Entre 1984 y 2002 comenzaron a trabajar en la Comunidad de Madrid veinticuatro nuevos archiveros. Planes similares comenzaron a aparecer por todas partes.

En 1988 Antonia Heredia, en el IV Congreso de ANABAD celebrado en A Coruña, lanza la propuesta de crear una Mesa de Trabajo compuesta por archiveros de la Administración Local de toda España, con la finalidad de crear un cuadro de clasificación común para todas las autonomías. Posteriormente se ha constituido en la Mesa de Trabajo de Archivos de la Administración Local, que participa en múltiples proyectos.

Mientras tanto, ¿qué ocurría con la formación?

El afán historicista de la ponente se mantiene en este apartado. «La formación de archiveros en España surge en 1856 con la creación de la Escuela Superior de Diplomática adscrita a la Real Academia de la Historia». Escuela que se cerró en 1900. Y parece que no hubo nada hasta que en 1974 se crea la Escuela de Documentalistas, en la que se imparten dos niveles «uno para bachilleres, de un curso académico y otro para licenciados, de dos cursos»; con diploma de Ayudante de Documentación y Documentalista, respectivamente. En ambos se menciona la especialidad: archivo o biblioteca. En 1980 la Escuela se transforma en Centro de Estudios Bibliográficos y Documentarios, «era para licenciados universitarios, duraba un curso escolar y se obtenía un diploma en Archivística y Documentación o en Biblioteconomía y Documentación. Se cerró en 1985».

En este punto parecen comenzar las quejas del gremio de archiveros respecto a la formación y la titulación universitaria que persiguen. Un hecho que perciben como una auténtica agresión a su dignidad profesional y sus derechos, según se puso de manifiesto reiteradas veces en el Congreso. «Cuando en 1978 decidieron introducir en la educación universitaria nuevas enseñanzas, piensan en Biblioteconomía y Documentación; ni en el nombre de la carrera ni en la carga académica consideran la Archivística, en los planes de estudios que se elaboraron en los primeros centros en 1981. En 1983 la

ley de Reforma Universitaria otorga a los estudios de Biblioteconomía y Documentación carácter de diplomatura y, en 1991, se estableció el título universitario oficial de Diplomado en Biblioteconomía y Documentación. La carga lectiva troncal asignada a la Archivística se concentró en una materia de 10 créditos. Podía no haber sido incluida en ningún crédito, ya que la disposición primera especificaba que las enseñanzas deberán proporcionar una formación adecuada en Biblioteconomía y las Técnicas de Documentación. De que esto no nos satisfacía es muestra la iniciativa de la Subdirección General de los Archivos Estatales que en 1987 presenta al INEM el proyecto de la creación de Escuelas Taller en el campo de archivos: uno en relación con el Archivo General de la Administración, otro en el Archivo Histórico Nacional y otro en el archivo del Reino de Galicia. El INEM se ponía en marcha para dar conocimientos teóricos para acceder a profesiones y oficios carentes de un régimen regular de enseñanza».

Ante esta situación, las distintas asociaciones de archiveros tomaron en sus manos el asunto de la formación, un fenómeno que continúa en la actualidad y para el que en varias intervenciones se pidió alguna forma de coordinación que evite coincidencias y reiteraciones. Una iniciativa importante fue la creación, en 1988, de un máster en Archivística por la Universidad Autónoma de Barcelona en colaboración con la Asociación de Archiveros de Catalunya, algo que fue imitado por otras universidades «con más o menos fortuna, y aunque en algunas pese más la vena historicista, es lo único en lo que nos podemos reconocer». La licenciatura en Documentación surgida por Real Decreto en 1992 ignora, de nuevo, la formación archivística, por lo que «ésta no es la licenciatura de los archiveros.

Para explicar esta reiterada ausencia de la formación específicamente archivística en las sucesivas reformas universitarias y planes de estudios Fernández Gil buscó razones históricas. Entre ellas el proceso de renovación y adaptación a las nuevas tecnologías que llevaron a cabo las disciplinas de Biblioteconomía y Documentación en los años setenta. Impulsado, entre otras razones, por el hecho de que «la Documentación nace íntimamente unida a la investigación científica» y se ve favorecida por su dinamismo. Al tiempo la Biblioteconomía al poseer una «normalización de ámbito universal, la CDU [Clasificación decimal universal],» estaba en condiciones de «aprovechar las ventajas tecnológicas». Por el contrario la Archivística, al carecer de normalización y servir a disciplinas administrativas e historiográficas que no sufren cambios constantes como las «llamadas científicas», permaneció unida a la Historia y anclada en la idea de documento frente a la de «serie documental», o gestión de documentos. Estas diferencias permitieron que los estudios en Biblioteconomía y Documentación tuvieran mejor estructurados, tuvieran mayor continuidad y alcanzaran el rango universitario. Por el

contrario la Archivística evolucionaba «incorporándose a un tren en marcha» y aceptando en ese tránsito el cambio del enfoque historicista hacia el de gestión de documentos.

Fernández Gil realizó a continuación una tipología de las distintas formas en las que se han ido creando en las últimas décadas puestos de archiveros municipales en nuestro país. Las transcribo literalmente porque en su escueto enunciado se esconde el auténtico retrato de la profesión:

A. Ayuntamiento que nunca tuvo archivero a pesar de contar con documentos históricos. Su población creció de manera exagerada a partir de los años setenta y no puede controlar los documentos, por lo que designa a una persona para que se ocupe de ellos. Esta persona puede ser un auxiliar administrativo (funcionario) o alguien contratado para este fin. En el segundo caso se podía seleccionar a un licenciado en Historia, lo que no será óbice para que se le contrate como auxiliar administrativo. Se da por supuesto que sabría organizar los documentos.

B. Archivero que accede al puesto gracias a la convocatoria de una plaza de archivero-bibliotecario. La preocupación era la biblioteca municipal, siendo la organización del archivo una tarea secundaria. En este caso, el porcentaje de temas de Archivística en el temario suele ser inferior a los de Biblioteconomía.

C. Acceso al puesto mediante la creación de la plaza de archivero y la organización de un concurso oposición siguiendo los temarios utilizados en los Ayuntamientos grandes, en la Administración Central, o de creación propia, muchas veces totalmente inadecuados para el cargo que tenían que desempeñar. Este modelo sólo se utilizaba en Ayuntamientos que tenían un importante patrimonio documental e histórico. Se exigía el título de licenciado. Si era concurso oposición se valoraban los cursos de Archivística e Historia.

D. Becarios. Modelo muy utilizado en Castilla-La Mancha y Andalucía. Se exigía una licenciatura, aunque la actuación de becarios sin formación específica fue un grave problema para el resultado de los trabajos.

Después de describirlos le hubiera gustado poder decir el número real de archiveros municipales que actualmente trabajan en España. Un estudio basado en el número de convocatorias publicadas en los boletines oficiales entre 1978 y 1988, permite afirmar que ese último año eran 436. A los que habría que añadir los contratados directamente y que, por tanto, son plazas que no pueden ser contabilizadas.

Desde entonces las plantillas de los archivos han crecido notablemente impulsadas por las distintas leyes promulgadas en las Comunidades Autónomas, pero al no haberse realizado un seguimiento de las plazas convocadas a finales de 2005 sólo puede conocerse por

aproximación «que al frente de los archivos municipales están alrededor de 916 personas».

Realizado el retrato de la situación actual, Fernández Gil volvió sobre los problemas que permanecen sin resolver. Los situó en cuatro ámbitos: la formación, el estatuto profesional, las competencias y la imagen.

Formación

En su opinión «es imprescindible la creación de una licenciatura en Archivística y Gestión de Documentos». No entiende la insistencia de algunas Facultades y Escuelas de Biblioteconomía y Documentación por incluir los estudios de Archivística en sus planes de estudio: «Es tan inadmisibile como que la Facultad de Medicina ofertara a sus alumnos la salida profesional de biólogo o farmacéutico, sólo porque tienen algo en común: atienden a un mismo sujeto, el paciente». Confusión que se ve favorecida por las ideas que tienden a equiparar el archivo con un centro de documentación, cuando en realidad es «un servicio de gestión de documentos».

Todas las universidades españolas habrán de adaptarse antes de 2010 al llamado Espacio europeo de educación superior. Con este motivo, el Ministerio de Cultura elaboró en 2003 un documento marco de integración en el que se prevé una disminución del número de titulaciones. «En principio y teniendo en cuenta el desconocimiento que tienen las autoridades académicas de nuestra profesión, me temo que esto sea negativo para el intento de conseguir el grado en Archivística y Gestión de Documentos». Por otra parte, las universidades que imparten el grado de Biblioteconomía y Documentación han elaborado un Libro Blanco sobre el mismo, en el que vuelven a ignorarse los estudios de postgrado o máster en Archivística que se imparten en diferentes Facultades y Escuelas universitarias europeas.

El hecho de las empresas privadas reclamen, cada vez más, profesionales con formación específica en Archivística avala su importancia. «Somos necesarios para el mundo que se avecina por lo que nos incluyen, pero por la puerta trasera y negándonos el nombre. Se acepta nuestra normativa, el esfuerzo que estamos realizando los últimos años en gestión de documentos, pero adaptándolo a su vocabulario. Así, encontramos palabras tan absurdas como “trazabilidad” en la traducción de la norma ISO 15489. Está claro que todo esto tiene que cambiar, tenemos que hay dos alternativas: seguir peleando por el grado de Archivística y Gestión de Documentos o integrarnos en los planes de estudios del grado de Información y Documentación que tendrán que elaborar las distintas universidades. Pero esta vez integrarnos de verdad en todo lo relacionado con los postgrados.

Está claro es que si optamos por los estudios de máster, sería muy interesante que a ellos se pudiera acceder desde otros grados además del de Información y Documentación: Historia, Derecho, Administración Pública o Empresariales».

Estatuto profesional

El Libro Blanco para la Reforma del Gobierno Local (julio de 2005) propone una ampliación de las competencias municipales. De ellas vendrá un incremento notable del trabajo de los archiveros, sin embargo el documento sólo hace referencia a los archivos como parte de los servicios culturales. Salir de ese ámbito está entre las prioridades de los profesionales del archivo que aspiran a «un nuevo reglamento de las Corporaciones Locales que regule la función del archivo, las competencias del archivero y su cualificación».

En el ámbito estatal «es fundamental que, de una vez por todas, exista una Ley de Archivos para todo el país y que se establezcan comisiones interministeriales entre el Ministerio de Cultura y las Administraciones Públicas, de tal manera que los archiveros pudiéramos contar con un instrumento legislativo preciso que nos ayudara en los Ayuntamientos».

Competencias e imagen

Impulsar sistemas de gestión de documentos, garantizar el acceso a la documentación y promover la protección y difusión del patrimonio documental, parecen tres funciones claras de los archiveros. Sin embargo, que los responsables de la administración local e incluso los ciudadanos contemplemos al archivero como el responsable de su desarrollo no es tan sencillo.

La inercia y el desconocimiento tienen la culpa. Unidos en el imaginario popular a la erudición y el misterio en el mejor de los casos, o a un trabajo rutinario e improductivo en el peor, los archiveros desarrollan las funciones descritas, imprescindibles y rentables, en una especie de anonimato laboral. Para salir de él, Fernández Gil ve imprescindible la ruptura con viejos estereotipos: «en primer lugar salir de Cultura, situarnos como una oficina administrativa más», que, eso sí, puede prestar excelentes servicios a la concejalía de cultura. Será necesario llevar al convencimiento de los demás que «los archivos no nacen sólo para fundar las señas de identidad de un lugar, nacen para ser testimonio de derechos y obligaciones». Y finalmente, «acabar con la inseguridad que surge del origen de nuestra formación, de no tener reconocidos los estudios universitarios». Inseguridad que

provoca en los profesionales «huidas hacia delante que no sabemos a dónde conducen. Por ejemplo, ¿es necesario ser un experto en informática o digitalización para ser archivero?»

La modernización de la Administración. Retos para los Archivos

Esta sesión del Congreso fue moderada por Julia María Rodríguez Barredo, Archivera del Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid), presidenta de ANABAD y una de las personas centrales en el proceso de modernización de la profesión de archivero en nuestro país. La ponencia fue dictada por Alfonso Díaz Rodríguez, actual coordinador de los Archivos Centrales en el Principado de Asturias, quien inició su carrera profesional como archivero municipal en la Villa de Mieres.

Alfonso Díaz Rodríguez: «La prestación de algunos servicios en régimen privado puede ser la antesala de la privatización de los servicios públicos».

La prestación de servicios, un concepto ajeno a los archivos

Las administraciones públicas españolas, que el ponente definió como «universales, productoras de multitud de servicios y articuladas en numerosas unidades orgánicas que interactúan entre sí», han afrontado una «profunda transformación y un intenso proceso de democratización interna» para dar cumplimiento al mandato constitucional de 1978. Transformación estructural y democratización que persiguen un objetivo final: convertirlas en un instrumento de progreso social, hacerlas competitivas y capaces de asumir las nuevas tecnologías que soportan los procesos de información. La transformación alcanza a sus «estructuras físicas, jurídicas, procedimentales y organizativas». En opinión de Díaz Rodríguez el colectivo profesional hace mucho tiempo que asumió los cambios incorporando los procesos de racionalización de su gestión interna, «lo único de lo que siempre hemos padecido los archivos ha sido de los recursos necesarios para implementar estos procesos».

La carencia de sistemas de información y la ausencia de interrelación entre ellos cuando existían era la característica común, lo que

hacia del papel el soporte principal que «impedía conocer en tiempo real el estado de las tramitaciones de expedientes, contar con datos únicos y fiables sobre un ciudadano y, por lo tanto, era imposible realizar un seguimiento de los servicios que se le prestaban». De esto se desprendía el carácter «generalmente pasivo de las organizaciones públicas, siendo siempre el ciudadano el que debía recurrir a ellas para realizar la solicitud de un servicio». En esta situación la llegada de un documento al archivo dependía de la voluntad del funcionario público quien, para llevar a cabo la transferencia, «debía volver a generar la información».

La ausencia de políticas de carácter global, de articulación entre las diversas administraciones públicas, de personal suficiente y la atomización de los sistemas de información (cuando existían), están entre los rasgos esenciales que podían definir nuestro sistema. Todo ello generaba que «la prestación de servicios fuera un criterio ajeno al mismo, lo que convertía al propio procedimiento administrativo en el centro y la razón de ser de las actuaciones». El ciudadano, por otra parte, desconocía qué servicios podía solicitar y dónde hacerlo.

El proceso de modernización

Esta situación está siendo cambiada a través de proyectos de modernización que actúan en el plano interno y externo de las administraciones. En ellos la coordinación «de los distintos niveles de prestación de servicios», es fundamental. Para lograrla es necesario hacer uso de las alternativas tecnológicas, «uno de los ejes estratégicos que nos permitirá acabar con los sistemas existentes y con la escasa capacidad de aportar información corporativa de utilidad práctica». La optimización de los recursos va a ser impulsada, en su opinión, por la necesidad de integración de los diferentes niveles de actuación administrativa.

La capacitación para el uso de infraestructuras tecnológicas y su necesaria participación en el proceso de racionalización interna de las corporaciones genera una nueva clase de archivero, una redefinición de su trabajo. Díaz Rodríguez avanzó la suya: «considerar la función de archivo como un sistema corporativo de gestión de documentos integrado por infraestructuras, recursos humanos y económicos que, mediante una metodología propia, es soporte para la producción administrativa, participa en el diseño para la generación de documentos, es garante de la correcta creación de los mismos, así como de su conservación, acceso y comunicación».

Esa nueva figura será partícipe y responsable, entre otros procesos, de los siguientes:

— La implantación de un completo sistema de gestión archivística integrado con los distintos sistemas de producción administrativa, garantizando la continuidad de las actuaciones de gestión más allá de las meras actuaciones administrativas. Adaptar este sistema a las necesidades reales que demanda la organización en sus planes estratégicos: tanto en el soporte interno para la toma de decisiones, como para la tramitación administrativa, garantizando el acceso de los ciudadanos utilizando los sistemas de transmisión de comunicación. Y todo ello con economía de escala, para la gestión de los propios intereses.

— La comunicación y explotación del valor añadido que el conjunto de los miembros de la corporación van adquiriendo. El que va a constituir el patrimonio histórico documental de las organizaciones.

Esta concepción del archivo como sistema de información abre nuevas vías de trabajo para el archivero tanto en el ámbito interno como externo de su organización. Entre ellas, la «participación en el diseño y gestión de los catálogos de procedimientos administrativos de la corporación. En la identificación de los procesos cuya metodología normalizada los archiveros municipales han elaborado. Participar de la normalización de los procesos de gestión aportando la visión global de los valores añadidos, flujos y procesos de tramitación por nuestros estudios de identificación. Normalización de los sistemas y lenguajes de recuperación de la información, en cuanto que también necesitamos lenguajes normalizados e incorporar estos lenguajes a la definición de los procesos administrativos. Categorización y clasificación de las actuaciones administrativas, exportación al exterior de los cuadros de categorías y de clasificación interna».

Los nuevos retos

Aunque en su opinión los archiveros lideran en las distintas administraciones el proceso de racionalización de la producción administrativa, tienen ante ellos de nuevo un gran reto: el documento electrónico. En primer lugar, sería necesario delimitar el concepto mismo de este tipo de documento desde el punto de vista archivístico, pues genéricamente consiste en cualquier unidad de información accesible por medios electrónicos. Díaz Rodríguez ofreció a la consideración de los profesionales su definición: «la entidad de información de carácter único cuyo contenido estructurado y contextualizado se presenta como evidencia de las acciones y funciones propias de las organizaciones. Es usado para el ejercicio de potestades por los órganos de entidades públicas y privadas, es subrogatorio de derechos y obligaciones y se genera, conserva y transmite por medios electrónicos e informáticos».

Frente a los diferentes desafíos que los cambios sociales, jurídicos y tecnológicos imponen a las administraciones, frente «a las nuevas necesidades que no se pueden enfrentar con doctrinas del siglo XIX, incapaces de eficiencia» algunas administraciones han optado por «una serie de servicios que venían siendo prestados en régimen de derecho administrativo pasen a ser prestados en régimen de derecho privado». El asunto le pareció demasiado trascendente y extenso para abordarlo en la ponencia, sin embargo señaló que «algunos lo consideran la antesala de la privatización de la gestión de los servicios públicos». Y buscó las causas de este fenómeno en la pervivencia de una normativa inadaptada a los tiempos actuales (a la que obligatoriamente hay que someterse) y en la escasez de personal cualificado: «El marco normativo que nos rige, aun siendo técnicamente notable sigue arrastrando condicionamientos pensados para un sector público mucho más pequeño y basado en la concepción de la gestión de archivos desde el punto de vista de la explotación y control del valor añadido de los documentos». Es necesaria una nueva formación y nuevos perfiles profesionales. Un ejemplo palmario está en «los inmovilistas temarios de oposiciones para el acceso al empleo público que posteriormente definen los perfiles profesionales». Una nueva formación elevaría la influencia de la profesión de archivero en la toma de decisiones de las distintas corporaciones. Los cambios que hace sólo unas décadas podían considerarse ciencia-ficción son hoy imprescindibles.

La transición y los ayuntamientos democráticos: el primer gran encuentro con la realidad

Julio Anguita siguió fiel en la conferencia de clausura del Congreso a la imagen que de sí mismo quiere trasladar a la sociedad desde sus ya lejanos cargos de alcalde de Córdoba, secretario general del PCE y coordinador nacional de Izquierda Unida: mesura indumentaria no exenta de coquetería burguesa en la apariencia, didactismo ilustrado en la expresión y un tono siempre cercanamente crítico al de la sabiduría popular. Buscó la proximidad con el auditorio pero sin suscitar complicidades. Fue presentado por la archivera del Ayuntamiento de Córdoba quien, entre otras cosas, destacó el hecho de que cuando abandonó su cargo de alcalde de la ciudad, «entregó al archivo todos sus papeles de trabajo, incluida la agenda». Un ejemplo, recalcó, pues «casi ningún político lo hace, aunque están obligados por ley».

Paralelismos históricos

Después de unas breves palabras dirigidas al gremio de los archiveros en las que destacó el servicio que prestan a la política al resaltar que su trabajo «no trata de la recopilación de datos para historiadores, el archivo es la prueba fehaciente de las conductas humanas y, sobre todo, de las conductas de los humanos que ejercen la dirección de un municipio en un determinado momento», Anguita entró con la pasión de un conocedor del medio en el meollo (le gustaría la palabra) de su intervención: la transición a la democracia y el papel jugado en ella por los ayuntamientos.

Aclaró en primer lugar que el dibujo que iba a trazar de la transición vista desde los ayuntamientos, obedecía a un «denominador común» de todos ellos, obviando rasgos específicos de algunos. Dirigir la mirada al pasado le parecía pertinente e incluso, «cuando se observa la situación que estamos viviendo: estatutos de acá, estatutos de allá. Cuando se observan los debates crispados que hay en torno creo que el historiador ayuda a llevar serenidad a la nave». De nuevo la historia como explicación del presente o, «dicho de otra manera, en la historia está el ADN de la situación del momento». Aquí mostró sus preferencias por la historiografía francesa, que «otorga al historiador no sólo el papel de intérprete de documentos, sino el de recreador del momento histórico siguiendo determinados parámetros». Este perfil del historiador convierte a la objetividad histórica en una mera pretensión, «pues la objetividad pura no existe». Los hechos históricos se analizan desde datos objetivos pero con un modelo de análisis dictado por las propias valoraciones. En definitiva y «para que me vayan entendiendo, yo a la hora de valorar las cosas no puedo quitarme mi carné ideológico». Lo intentará afirma, «pero la marca queda ahí» porque «los valores troquelan nuestra personalidad».

Advertido el auditorio, entró en materia. Las elecciones municipales de 1979 fueron las primeras de este ámbito después de las celebradas en 1931 que dieron lugar a la proclamación de la República, aunque en 1933 se celebraron elecciones municipales parciales «en aquellos ayuntamientos que en el 31 no habían presentado candidaturas».

Analizando las elecciones generales de 1977 y 1979 y las municipales del 79, observa que «sumando los votos de UCD y AP de un lado de otro los del PCE y PSOE, se obtiene prácticamente un empate. Por otra parte, «como ya ocurriera en 1931, cuando en términos cuantitativos los monárquicos obtuvieron más votos, más concejales, la izquierda en 1979 ganó las municipales en las grandes ciudades». El pacto suscrito entre Alfonso Guerra y Santiago Carrillo, «al que en Andalucía se sumó el PSA», había funcionado en ese sentido. En contraste con esto, las elecciones generales del mismo año habían sido ganadas por la Unión de Centro Democrático, «con más votos que en

1977». De todo esto se desprende la primera lección: «el pueblo da la administración de los grandes ayuntamientos, la institución más pobre, más dependiente, más dominada por el poder central, a la izquierda. Con lo que nuestro propio pueblo (les recuerdo a ustedes que el político también está para criticar a su pueblo, aquí todos nos criticamos; ésa es la democracia) nos coloca en una situación a la que hemos ido por nuestros propios errores, nos sitúa para gobernar el eslabón más débil de la cadena y piden después aquellas cosas que tenían que pedirle al gobierno que habían votado. En definitiva el caso es así, pero no le echemos la culpa de todo a cómo somos, a cómo la historia nos ha hecho, es que nosotros también con nuestras campañas electorales habíamos creado esa ficción».

Retrato de la transición

Todo esto ocurre en el núcleo central del proceso conocido como transición democrática. Y antes de continuar con su exposición municipal quiere hacer grosso modo el retrato histórico de aquel momento a nivel nacional, claro que, curiosamente, invierte aparentemente sus métodos de análisis y, al comienzo, para explicar el pasado utiliza el presente: «Brevemente contaré cómo yo veo la transición. Hoy los acontecimientos que estamos viendo y quiero ser claro: estatuto vasco, estatuto catalán, los demás, el vodevil, la astracana, entro y salgo del armario, todo eso, es consecuencia de que la transición fue una operación de tente mientras cobro». A la dictadura se le había muerto su jefe, pero la izquierda «cuando conseguía movilizar a dos mil personas pensaba que había hecho la revolución». Aquella situación de una dictadura descabezada y una izquierda con una capacidad de movilización sobrevalorada produjo una situación en la que no se veía un ganador claro. Una suerte de estancamiento histórico, afirmó. En cualquier caso una situación que no era patrimonio de España o, al menos de su único interés: «les recomiendo a ustedes la lectura de, *Soberanos pero intervenidos*, de un socialista del País Valenciano, que tuvo acceso a los archivos desclasificados del gobierno estadounidense; aprenderemos cosas muy interesantes». En la tradición de los que afirman que la Guerra Civil fue un ensayo de la II Guerra Mundial (Pierre Villar y otros) Anguita enfoca los acontecimientos de la transición: «en el año 1945 sabemos, por el documento pertinente, que ya Estados Unidos piensa en lo que va a pasar después de Franco. No sabe si va a durar mucho o si las Naciones Unidas van a acabar con su régimen y piensa que en España tendrá que haber una transición pacífica, al final de la cual tiene que haber dos fuerzas políticas, una de carácter socializante y otra conservadora». Insistencias ya muy posteriores de la Embajada estadou-

nidense en Madrid para forzar la dimisión de Franco y la recepción con honores de jefe de Estado ofrecida por Valéry Giscard d'Estaing al príncipe Juan Carlos son prueba de la presión internacional sobre la dictadura en un período en el que la única oposición interior organizada era el Partido Comunista. En ese momento se forma la Junta Democrática. Había que intervenir para que no sucediera lo que ocurrió en la II Guerra Mundial. Seré claro, afirmó Anguita: «cuando termina la II Guerra Mundial los comunistas entran victoriosos, con las armas en la mano, en París y en Roma, y esto no puede ser así. No había armas en este caso pero aquello marcó (y cuando digo comunistas no lo digo por patriotismo de partido, os doy mi palabra que no) quiero decir que entonces representaban, a veces no tan justamente, pero representaban la idea de rompimiento con el pasado». Es evidente que el rompimiento no se produjo y a cambio tuvimos la transición. Los partidos democráticos asumen un rey designado por Franco, «a pie forzado», y de ese acto surge el pacto permanente que en primer lugar se «consagra en la Constitución y posteriormente en los acuerdos de la Moncloa, llamados pactos». Los pactos de la Moncloa son según Anguita, «los segundos documentos más importantes y los que explican lo que está pasando por debajo». Hasta que concluye lo que se puede llamar la transición con un golpe de Estado, que no es «el del 23 de febrero del 81; el golpe de Estado suave, palatino, a cámara lenta, agradable, con canapés incluidos, se da en la Zarzuela el día siguiente cuando los dirigentes máximos de las fuerzas políticas acuden ante el Rey que, cual gallina clueca, acoge a los polluelos y al poco tiempo empieza la LOAPA y a hacerse la lectura regresiva de la Constitución». Según este relato Antonio Tejero Molina, el coronel Tejero, «sólo puso el riesgo y el tricornio y el susto en el Congreso de los Diputados, pero en seguida fue a la cárcel porque era él único que se creyó que el golpe iba en serio». Según Anguita, que no fue más explícito en este punto, los golpes de Estado eran tres. Sólo Tejero creyó en aquel que iba a restaurar el régimen franquista.

Una vez hecho el esbozo de la situación política Anguita regresó al asunto municipal, según su visión de los hechos los primeros ayuntamientos democráticos pasan por tres etapas bien definidas: Un período de rupturismo subjetivista, un período de frustración y un período de crisis.

Todos éramos unos simples

Conquistado el poder municipal, se entra en una etapa que denomina de «encantamiento político» propiciada por la situación de ignorancia de los ciudadanos, pero también por los líderes elegidos. Anguita entonó el «mea culpa» por aquellas «campañas triunfalistas, a

lo grande» en las que se prometía de todo. Recuerda, como autocrítica, la llevada a cabo por su partido en los municipios cordobeses: «Quita un cacique, pon un alcalde». Según aquello, «resolveríamos el paro, las infraestructuras. Era una campaña delirante». Cuando en sus intervenciones intentó desmarcarse de ella y prometer «sólo trabajo», recibió «recriminaciones». Es de suponer que de la cúpula de su partido. Al final sólo prometían trabajo porque eran conscientes de «nuestra infinita ignorancia. No teníamos ni idea de lo que había detrás de un ayuntamiento. Además el bagaje con el que llegaban al poder era negativo: el hábito de la simpleza en el análisis. Hábito que explica porque «uno de los peores males de la dictadura es que, con su discurso simplista, genera también una oposición simplista, con lo cual todos éramos unos simples. Las dictaduras generan un sistema de pensamiento, como dirían los tratadistas católicos, codigno y equivalente: su reflejo». Así es que cuando se acabó aquel discurso simplista vino otro: «basta con que entremos nosotros para que se generen maravillas». Y naturalmente los ciudadanos las exigían. La respuesta generalizada a esta situación de precariedad e ignorancia fue, según Anguita, convertir a los ayuntamientos en tribuna política, y al alcalde en una «especie de califa» territorial: «no he visto nunca más plenos para apoyar la liberación del Kurdistan, para poner verde al gobierno de Adolfo Suárez y plenos donde se debatían cosas de superestructura política; pero claro, era una respuesta agónica a aquello que se habían encontrado». En el desarrollo de la situación hizo referencia a datos concretos como la crisis económica desatada a partir de 1973, la falta de control sobre el patrimonio municipal «que no sólo era culpa de los funcionarios sino del hecho de que las corporaciones municipales llevaban desde la muerte de Franco sin que nadie les hiciera caso».

En este punto Anguita hizo uno de sus famosos decursos argumentativos que por contraste ofrecen otra cara de la realidad que trata de mostrar: «Es más, desde el Régimen se pensó en convocar elecciones municipales inmediatamente después de las generales, pero se dieron cuenta de que la izquierda iba a ganar y claro esto podía cuestionar el tema de la transición. Tenían ese miedo. Es más, en el libro de Jesús Cacho, *El negocio de la libertad*, hay una carta del monarca pidiéndole al sha de Persia 10 millones de dólares para el partido de la UCD. Es posible que existan unas elecciones municipales y este partido tiene que ganar, porque según la carta del monarca, el PSOE es un partido marxista y los comunistas todos sabemos lo que piensan. Por tanto ese miedo que existía en el 77 se pudo demorar hasta el 79. Los pobres no sabían que la izquierda estaba (perdonen la expresión) “acollonada” ante lo que se habían encontrado en los pueblos».

Y aún otro decurso más, éste de carácter didáctico: «En España, al no haber habido una revolución por las libertades, el que gobierna es único. Fíjense cómo todo el mundo habla del jefe de gobierno: el Felipe, el Aznar, el Zapatero. No piensan que hay gobierno, que hay estructura, que hay unos medios; sino el que gobierna. Esa especie de inconsciente del que participamos también nosotros [los gobernantes] tiene un mal cuyas consecuencias son las siguientes: al despreciar de hecho a las instituciones se las elimina como interlocutores. ¿Hay un alcalde en algún pueblo, donde la gente no quiera hablar con él? No quieren hablar con el concejal, ni siquiera con el funcionario, que es el que sabe. Quieren hablar con el alcalde. Sacralizan al gobernante principal para establecer con él una dependencia de adoración o de odio. El gobernante se transforma en sacerdote máximo, la ley en capricho personal, la justicia en favor y el gobernar en un rito. A partir de ahí el cambio político es simplemente la vuelta a la tortilla, expresión que habría que desterrar de nuestros hábitos porque cuando hablamos de cambiar la sociedad yo no quiero darle la vuelta a la tortilla, quiero otra sociedad. Esto lo hemos visto nosotros. Si yo estoy denunciando la corrupción no es para poner la mía, es para poner otra cosa. Pues esto lo padecemos, y lo potenciamos en esa etapa».

No falta fineza

Las corporaciones municipales de entonces le recordaban el siglo XVIII. Un poder tutelado, lleno de dificultades, endeudado con la Administración central y con el Banco de Crédito Local. Existían dos clases de funcionarios, el de las covachuelas y los maguitos descreído de promesas y afanes, y otro que, «independientemente de sus creencias políticas, pensaba que había que modernizar aquello». En estos últimos buscaron el apoyo.

Al período denominado de «rupturismo subjetivista», pertenecen también, creo entender, los cambios de los símbolos del poder en las instituciones, de los nombres de algunas calles y la adjudicación de otros nuevos. Anguita aprovechó el lance para poner un poco de humor en su relato: «Yo tomé posesión de mi cargo [alcalde de Córdoba] aflojando el clavo que sujetaba el retrato de Franco. Se llamó al portero mayor y se le dijo: mire usted, ese cuadro se va a caer... Recuerdo a otro compañero nuestro, alcalde de Castro del Río. Se encontró en su despacho con una fotografía de José Antonio Primo de Rivera. Llamó al jefe de Fuerza Nueva en el pueblo y le dijo: mira, te puedes llevar esto que lo van a tirar. El hombre le dio las gracias y un fuerte abrazo». Finura en el modo de proceder porque «aunque mucha gente con nosotros creyó que se iba a producir la ruptura donde no se tenía que producir, desde arriba», ya imperaba el espíritu de la

transición y no era cuestión, desde las pequeñas administraciones, de meter el dedo en la llaga.

La planificación urbanística, la limpieza, el estado de las vías públicas, el tráfico... eran un desastre. Aunque sobre estos temas la opinión del ciudadano haya variado poco con el tiempo. Anguita leyó una relación de desperfectos de su ciudad en aquella época para entrar en el período de crisis, representado por los alcaldes que se «acogieron al discurso de Alberoni o Esquilache de: “este pueblo no tiene remedio”». «Somos el único país que ha elevado a monumento literario la figura del pícaro. El pícaro es la respuesta de un pueblo que no interviene, pero roba y le interesa que haya políticos que roben porque en las migajas pueden intervenir. Forman un sindicato de concupiscencia». El arrebató moralista duró poco pero fue intenso, subrayado cuando detrás de la palabra pueblo repitió varias veces la palabra «roba». Más me duele a mí, parecía querer transmitir.

El poder municipal

En plena crisis, algunos ayuntamientos empezaron a plantearse su actuación como poder político. «Un poder político que está allí para algo. Y comienza a aparecer el primer atisbo (se van a reír ustedes) de programas municipales». El Ayuntamiento de Córdoba fue el primero en constituir un gobierno de concentración. «Y esto no por hacer seguidismo de nuestro secretario general [Santiago Carrillo], que hablaba de esto, es que los problemas y carencias eran tan grandes que estábamos de acuerdo entre nosotros. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo un señor del Partido Popular y yo en que se arregle una acera?». Otra cuestión sería al hablar de censos, de presupuestos o de impuestos.

La palabra impuestos suscitó otro momento de relax: «¿Saben ustedes que nos encontramos con impuestos municipales sobre los canales? ¿Sobre carruajes? ¿Sobre las piqueras de los bares?... ¿Que qué son las piqueras?. Antiguamente estaba mal visto que las mujeres entraran en los bares y entonces en el zaguán había una especie de ventanilla por el que se las servía el vino. La ordenanza de este impuesto la «guardamos como referencia y decía así: en toda taberna habrá una piquera [de repicar, imagino] donde pueda acudir el personal a altas horas de la madrugada...». Memorable. Pero lo que quería resaltar Anguita es que la recaudación por impuestos no alcanzaba ni para los gastos de gestión de los ayuntamientos.

Para hacerse valer y poner remedio a la situación constituyeron una asamblea de veinte alcaldes de las principales ciudades españolas. Esta asamblea negoció con el gobierno de Adolfo Suárez, más exactamente con su «hombre de hierro, aquel hombre tremendo que no se cansaba nunca, Abril Martorell», los impuestos directos e indi-

rectos, los presupuestos de liquidación de la deuda municipal, la participación sobre las tasas del juego, una subvención compensadora de la participación en 90% del impuesto sobre el lujo, la tenencia y disfrute y una participación en los gravámenes sobre la gasolina, etcétera. En aquel período fue cuando el gobierno central ofreció a los ayuntamientos la posibilidad de recargar el impuesto sobre el rendimiento de las personas físicas (IRPF), cuando el ministro de turno les decía: «recargue usted, recargue...» Lo que, hecho a través de una disposición local, podría equivaler a un suicidio político. En cualquier caso «se notó el poder municipal», quizás por primera vez en la historia de España. Hasta el punto de que «se empezó a difundir la idea de un proceso constituyente municipal».

Anguita leyó en este punto parte de las conclusiones de la asamblea de veinte alcaldes celebrada en Málaga en 1980, en las que, entre otras cosas, solicitaban participar en los debates del proyecto de la Ley de Régimen Local, a la que ellos consideraban «la segunda constitución española». Entre los principios que defendería esta segunda Constitución destacan el reconocimiento pleno (articulado en una normativa) del poder municipal y su personalidad, la sujeción exclusiva al Tribunal de Cuentas de la gestión económica de los ayuntamientos y la autonomía municipal.

Tales aspiraciones «inquietaban a las fuerzas políticas, que estaban en la tarea de consolidar no sólo la Transición sino también un determinado estatus político». Martín Villa «consiguió en Valladolid que el PSOE aceptara la transformación de aquellas aspiraciones en la Federación Española de Municipios y Provincias», lo que en opinión de Anguita fue un retroceso importante.

Esperando a los bárbaros

El triunfo «arrollador» del PSOE en 1982 significó la puesta en marcha de las reformas económicas y estructurales «según la lógica de la modernización necesaria según los cánones del Mercado Común Europeo». Se entraba en una época que «de tener poder político, los ayuntamientos pasaban a ser gestores de servicios y de la ampliación de los mismos». El cambio obedecía no sólo a los designios del poder sino a una respuesta del «sentir social del momento». El ciudadano había aceptado «resignadamente la lógica económica imperante» y el movimiento ciudadano renunciaba a la participación y le reivindicación «a cambio del reconocimiento de su *honorabilidad*». Pese a las críticas que subyacen en lo dicho, Anguita reconoce que aquella fue una época de grandes logros, «y la palabra que mejor la define es eficacia».

Pero lo cortés no quita lo valiente: «En la actualidad la gestión es concebida como un fin en sí mismo», y Anguita piensa que eso es

una trampa: «la eficacia y la rentabilidad deben estar dirigidas a una meta que sólo puede ser definida políticamente». El «aparente apoliticismo de la gestión es tan falaz como el aparente apoliticismo de la economía u otras practicas sociales, culturales y políticas». Esta ideología de la gestión sólo admite el juicio de las urnas, «como si éste se produjera desde unas instancias instaladas en el mundo platónico de las ideas puras». El pan y circo de los romanos, bebía según Anguita de las mismas fuentes.

Estos ayuntamientos gestores adolecen de tres puntos débiles: falta de participación ciudadana, síndrome electoral permanente y un concepto de la cultura como espectáculo. Contra el primero reivindica el ayuntamiento como receptor y trasmisor de las inquietudes ciudadanas. Contra el segundo: «he repetido hasta la saciedad y he intentado ser consecuente que la mejor campaña electoral es la que se hace día a día en el trabajo, desdeñando el efectismo de declaraciones e impactos». Sobre el tercero, en «este mundo dominado por el mal llamado mercado libre todo es valorado por su valor de cambio. La cultura también, relegándola a lo más banal e intrascendente. Caminamos a buen paso hacia los años más débiles del Imperio Romano».